

DE LA PROVINCIA DE ORENSE

Advertencia.—Las leyes obligarán en la Península, islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos á la legislación peninsular á los veinte dias de su promulgación, si en ellas no se dispusiera otra cosa. Se entiende hecha la promulgación el dia que termine la inserción de la ley en la *Gaceta* (*Artículo 1.º del Código civil*).

Advertencia.—Las leyes obligarán en la Península, islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos á la legislación peninsular á los veinte dias de su promulgación, si en ellas no se dispusiera otra cosa. Se entiende hecha la promulgación el dia que termine la inserción de la ley en la *Gaceta* (Artículo 1.º del Código civil).

Precios de suscripcion.	En Orense, trimestre adelantado,	5 pesetas.
	Fuera, id. id.....	6 "
	Números sueltos.....	0'25
		Trimestre 15

Se suscribe en esta capital, en la imprenta de A. Otero, San Miguel, 10.
Los originales comprendidos en la condición 23 de la contrata, no se publicarán sin
previo pago, entendiéndose para esto con el contratista.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

GOBIERNO DE PROVINCIA

Por el presente anuncio se hace saber á los interesados que el señor Gobernador civil, de acuerdo con lo informado por la Comisión provincial, acordó con fecha 21 del actual, desestimar las oposiciones hechas contra el registro para la mina *Catalina 2.ª*, de don Camilo Cejo Gayón, sita en los pueblos de Soutelo y San Mamed de los términos de Porquera y Ginzo, y disponiendo continúe su tramitación.

Orense 31 de Marzo de 1902.—El Ingeniero Jefe, *Enrique Naranjo*.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REALES DECRETOS

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de Canarias y el Juez de Instrucción de Santa Cruz de la Palma, de los cuales resulta:

Que por el Procurador D. Vicente García y Camacho, en nombre y representación de D. José Mariano Leal Sánchez, se presentó en 28 de Marzo del corriente año escrito que-
rella ante el Juzgado de instrucción de Santa Cruz de la Palma, expo-
niendo los siguientes hechos: pri-
mero, que se había publicado en la villa de Mazo un edicto de la Alcal-
día, en el que se hacía saber á los contribuyentes que, aprobado el re-
parto de consumos correspondiente á dicho año, se iba á dar inmediato
comienzo á la cobranza; segundo,
que el aludido reparto aparece ha-
ber sido confeccionado y suscrito
por la mayoría de la Junta munici-
pal de Mazo el día 26 de Febrero
último, y que á continuación del

mismo existe una diligencia autorizada por el Secretario del Ayuntamiento con fecha 13 de Marzo, en la que se hace constar que aquél había permanecido expuesto al público en la sala de sesiones del Ayuntamiento durante ocho días; tercero, que en los sitios públicos de costumbre, ni se vieron tales edictos, ni se insertaron en el «Boletín oficial» de la provincia hasta el 18 del último de los citados meses, esto es, unos días después de haber pasado el supuesto plazo de su exposición, ni tampoco se notificó á los contribuyentes por doble papeleta la cuota que respectivamente se les hubiese señalado; cuarto, que en el mencionado reparto hay notables alteraciones y aumentos en las cuotas correspondientes á determinados individuos con relación á las asignadas á los mismos en el año anterior, sin que se sepa que haya variado la riqueza de las personas que han sufrido estas alteraciones, siendo el querellante de los sometidos á mayor aumento en la suya respectiva, y que también contiene marcadas inexactitudes en cuanto al número de personas con que se hacen figurar las familias de muchos contribuyentes, en relación con las que verdaderamente tienen inscritas en el padrón vecinal; quinto, que no debe ser exacta la fecha con que aparece autorizado el expresado reparto, pues el propio Secretario del Ayuntamiento manifestó en 2 de Marzo que no se hallaba terminado; al ser requerido por un Vocal asociado y un contribuyente para que les pusieran de manifiesto los trabajos preliminares del mismo, y además, porque, según habían oído los testigos que al efecto cita, el Alcalde y el ya citado Secretario convinieron en que era necesario formarlo con fecha atrasada y habilitarlo pronto, sin ponerlo de manifiesto, para evitar reclamaciones; sexto, que de los doce capitulares y número igual de Vocales asociados que componen la Junta municipal de aquel Ayuntamiento, el reparto sólo aparece firmado y autorizado por siete de cada uno de ambos grupos, no habiéndose citado

algunos de los Vocales asociados porque parece manifestaron que no se hallaban conformes con las alteraciones que se intentaban para aumentar á determinados contribuyentes sus cuotas respectivas; séptimo, que de público se decía y comentaba que no se habían reunido para la autorización del reparto los Concejales y Vocales que lo suscriben, habiendo sido tomadas sus firmas aislada y separadamente en diferentes días, y que en la misma forma se extendió y autorizó el acta del juicio de agravios, caso de haberla figurado, pues el querellante desconoce su existencia; y octavo, que no concurrieron á la confección y autorización del mencionado reparto un Concejal y un Vocal asociado, á quienes, sin embargo, se hace figurar como interviniendo en dichos actos; como fundamentos de derechos cita los artículos 309 y 312 del reglamento para la administración y exacción del impuesto de consumos, que establecen el procedimiento para hacer público el proyecto de reparto y entablar las reclamaciones oportunas ante la Junta repartidora por los que se consideren agraviados, preceptos ambos que considera infringidos, y los números 2.º, 4.º y 5.º del art. 314 del Código penal, que castiga á los funcionarios públicos que en los documentos en que intervengan supongan en un acto la intervención de personas que no la han tenido, ó falsen á la verdad en la narración de los hechos, ó alteren las fechas verdaderas:

Que hallándose el Juzgado practicando diligencias en averiguación de los hechos anteriormente relatados, el Gobernador de Canarias, por virtud de un oficio en que la Alcaldía de Mazo solicitó de esta Autoridad que promoviera la competencia, le requirió de inhibición, fundado en que existe la cuestión previa á que se refiere el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887. Considera, que siendo el objeto del sumario depurar si ha habido ó no falsedad al asignar las cuotas contributivas en el reparto de consumos y en el acto de resolver las reclamaciones

presentadas; á la Administración corresponde conocer de estos hechos, porque las bases y procedimientos á que ha de ajustarse el repartimiento están determinados por leyes y disposiciones puramente administrativas; que el Juzgado instructor ha infringido el concepto en que debe interpretarse el art. 198 de la ley Municipal, pues si bien concede á los vecinos y hacendados, además de los recursos administrativos, la acción para perseguir criminalmente á los Alcaldes, Concejales y asociados que se hubiesen hecho culpables de fraude ó exacciones ilegales, es en la inteligencia de que tales recursos y acciones han de ejercitarse sucesiva y no simultáneamente, debiendo preceder la resolución administrativa como cuestión previa, que puede influir en el fallo que en su día dicten los Tribunales ordinarios:

Que sustanciado el incidente, el Juzgado, en desacuerdo con el dictamen fiscal, mantuvo su jurisdicción, fundándose: en que los hechos expresados en la querella bajo los números 2.º, 3.º, 5.º, 6.º, 7.º y 8.º revisten los caracteres de un delito de falsedad en el concepto de que en diversos actos de las operaciones para la formación y aprobación del reparto se supuso la intervención de personas que no lo tuvieron, se faltó á la verdad en la narración de los hechos y se alteraron las fechas verdaderas, y, por consiguiente, corresponde su conocimiento á la jurisdicción ordinaria, sin que, respecto á los referidos hechos, exista ni pueda existir cuestión alguna previa de carácter administrativo; que, respecto á los hechos denunciados bajo el núm. 4.º de la querella, ha podido existir alguna cuestión previa en virtud de los recursos que el reglamento del ramo establece contra el señalamiento de cuotas contributivas, pero debe estimarse agotada la vía administrativa por haberse aprobado definitivamente el reparto y no indicarse en el oficio de requerimiento que penda ante la Administración recurso alguno:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió

en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 198 de la ley Municipal de 2 de Octubre de 1877, por el cual se concede á los vecinos y hacendados del pueblo, además de los recursos administrativos, acción ante los Tribunales de justicia para denunciar y perseguir criminalmente á los Alcaldes, Concejales y asociados, siempre que en el establecimiento, distribución y recaudación de los arbitrios é impuestos se hayan hecho culpables de fraude ó exacciones ilegales:

Vistos los números 2.º, 4.º y 5.º del art. 314 del Código penal, que castigan al funcionario público que cometiére falsedad suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, faltando á la verdad en la narración de los hechos ó alterando las fechas verdaderas:

Visto el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, que prohíbe á los Gobernadores suscitar contiendas de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administración, ó cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestión previa de la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios ó especiales hayan de pronunciar:

Considerando:

1.º Que la presente contienda de competencia se ha suscitado con motivo de la querrela presentada ante el Juzgado de Santa Cruz de la Palma por el Procurador D. Vicente García Camacho en representación de D. José Mariano Leal Sánchez, en la que, según queda antes con más extensión relacionado, se denuncia por una parte que en las operaciones para la formación y aprobación del repartimiento de consumos de la villa de Mazo, respectivo al año corriente, se han hecho alteraciones injustificadas en las cuotas de varios contribuyentes con relación al año anterior, y se han cometido inexactitudes en el número de personas que constituyen varias familias; y por otra, que se han alterado fechas sustanciales en estos actos; se ha faltado á la verdad afirmando que el reparto fué expuesto al público en el plazo de la ley y en los sitios de costumbre, cuando, según afirma el denunciante, ni esto ha sucedido, ni siquiera se ha hecho á los contribuyentes la notificación por papeletas que previene la ley; se ha omitido, según rumor público, la citación de tales actos de algunos de los Vocales que debían intervenir en ellos; y se ha supuesto la concurrencia de otros cuyas firmas para las actas de las juntas de aprobación y de repartimiento y de las de agravios se recogieron aisladas y separadamente en días sucesivos, siendo también rumor público que ni siquiera se celebraron tales juntas:

2.º Que con relación al primero de los dos mencionados grupos, los hechos á que se contrae pudieran ser constitutivos de un delito de fraude ó coacción ilegal, cuya persecución y castigo, en cuanto son punibles, corresponde, sin previo trámite administrativo, á los Tribunales ordinarios, en virtud de las acciones que á los vecinos y hacendados concede el art. 198 de la ley Municipal antes citada, sin que esta disposición pueda interpretarse en el sentido de que la acción criminal haya de ser siempre precedida de una cuestión previa administrativa, pues entonces sería inútil dicho precepto legal, toda vez que las Autoridades administrativas están obligadas, sin necesidad de tal artículo, á poner en conocimiento de los Tribunales las infracciones punibles que descubran en los repartimientos de las contribuciones:

3.º Que en cuanto al segundo de dichos grupos, los hechos en él consignados revisten, al parecer caracteres de delitos de falsedad al afirmarse que en diversos actos de las operaciones para la formación y aprobación del reparto se supuso la intervención de personas que no la tuvieron, se faltó á la verdad en la narración de los hechos y se alteraron las fechas verdaderas, cuyo conocimiento corresponde, por consiguiente, á los Tribunales ordinarios:

4.º Que no existe, con relación á los hechos denunciados, disposición alguna que atribuya su conocimiento á la Administración, ni tampoco cuestión previa que haya de resolverse por la Autoridad administrativa, de la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios hayan de pronunciar;

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en declarar que no ha debido suscitarse esta competencia.

Dado en Palacio á catorce de Marzo de mil novecientos dos.—María Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

(Gaceta núm. 82.)

En el expediente y autos de competencia promovida entre el Gobernador civil de la provincia de Sevilla y la Audiencia territorial de la misma, de los cuales resulta:

Que varios Concejales del Ayuntamiento de Constantina denunciaron por escrito el hecho de que no obstante haber cobrado aquel Ayuntamiento, ó sean sus Alcaldes, Tenientes de Alcalde y Concejales D. Luis Caro y Rodríguez de Salamanca, D. Rafael Montilla Sánchez, D. Antonio Vicente Díez, don Manuel Muñoz Alvarez, D. Rafael Fernández y González, D. Carlos Caro y Sarabia, D. Francisco Arcos, D. Antonio Merchán y D. Roque

González Cano, respectivamente, todo cuanto correspondía á la mayor parte del cupo de consumos correspondiente á aquel Municipio y á los años de 1896 al 97, 97 al 98 y parte del 98, estaba adeudando á la Hacienda pública por semejante concepto 86 221'51 pesetas, según se acreditaba con la certificación que á la denuncia se acompañaba, la que demostraba haberse dado á los caudales ó efectos recaudados aplicación pública distinta de la á que estaban destinados, cometiendo así el delito de malversación:

Que incoado á virtud de la extractada denuncia el oportuno sumario, fueron declarados procesados los Concejales denunciados, y concluso aquél se elevaron los autos á la Audiencia:

Que después de declarada por el Tribunal la apertura del juicio oral, el Gobernador civil de la provincia de Sevilla, á instancia de los denunciados, y de acuerdo con la Comisión provincial, requirió á aquél de inhibición, fundándose en que, por tratarse en el presente caso de un asunto puramente administrativo, ya se atiende á las disposiciones de la ley Municipal en sus artículos 158, 160, 165, 179, 180, y 181, á los contenidos en el cap. 23 del reglamento sobre el impuesto de consumos, de 11 de Octubre de 1898, y á las Reales resoluciones de 20 y 26 de Marzo, 11 de Julio, 20 y 24 de Noviembre de 1896, 30 de Mayo de 1897 y 29 de Marzo de 1898, carecía de competencia la jurisdicción ordinaria para seguir interviniendo en el asunto; en que en tal concepto la responsabilidad en que hayan podido incurrir los denunciados correspondía determinarla á las Autoridades del orden administrativo, ya se trate de la civil, que podrán disponer se haga efectiva por medio del procedimiento administrativo, y caso de existir la criminal, pasando el oportuno tanto de culpa á los Tribunales; y en que por tanto existía una cuestión previa cuya resolución incumbía á las Autoridades administrativas, y de la que había de depender el fallo que en su día dictaren los Tribunales ordinarios; citaba además el Gobernador el art. 327 del vigente reglamento de consumos anteriormente mencionado y el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887.

Que sustanciado el incidente, la Audiencia sostuvo su jurisdicción, alegando: que no eran aplicables al caso las citas legales aducidas por el Gobernador, por no tratarse de exigir responsabilidad por descubiertos, sino de castigar un verdadero delito de malversación, previsto y definido en el Código penal, cuya aplicación solo corresponde á la jurisdicción ordinaria, sin que esto estorbara la acción administrativa respecto de los particulares relacionados con el asunto que á ella competían; y que no existía en el caso presente cuestión ninguna

previa de carácter administrativo, dada la naturaleza del hecho denunciado:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 327 del reglamento de consumos de 11 de Octubre de 1898, según el que «la declaración de responsabilidad de los Alcaldes y Concejales que se hallen en el ejercicio de estos cargos corresponde siempre á los Delegados de Hacienda»:

Visto el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, que prohíbe á los Gobernadores promover contiendas de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administración, ó cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestión previa de la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios ó especiales hayan de dictar:

Considerando:

1.º Que la presente contienda jurisdiccional se ha suscitado con motivo de la causa criminal seguida contra varios Concejales del Ayuntamiento de Constantina por el supuesto delito de malversación de caudales públicos en la recaudación del impuesto de consumos:

2.º Que en tanto por las Autoridades competentes de Hacienda, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 227 citado del reglamento vigente de consumos no se declare la responsabilidad en que hayan podido incurrir los denunciados acerca del particular de que se trata, y se pase en su caso el tanto de culpa á los Tribunales ordinarios, existe por resolver una cuestión previa de carácter esencial administrativo, y la resolución que recaiga puede influir en el fallo que en su día pronuncien los Tribunales ordinarios:

3.º Que se está, por lo tanto, en uno de los casos en que, por excepción, pueden los Gobernadores promover contiendas de competencia en los juicios criminales;

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno:

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administración.

Dado en Palacio á catorce de Marzo de mil novecientos dos.—María Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

(Gaceta núm. 83.)

1.º Que se proponga al Gobierno de S. M. el establecimiento de un impuesto módico sobre los artículos comprendidos en la siguiente

TARIFA

ARTÍCULOS	Unidad del adeudo	Precio medio de unidad — Pesetas	Arbitrio acordado — Pesetas	Consumo calculado	Producto anual — Pesetas
Patatas.	Un kgmo.	0'08	0'01	300.000	3.000'00
Yerbas secas.	Idem	0'08	0'01	500.000	5.000'00
Leña de todas clases excepto la destinada á la industria.	200 id.	2'00	0'15	10.000	1.500'00
Paja de cereales.	1 id.	0'05	0'01	159.810	1.598'10
TOTAL PRODUCTO.					11.098'10

2.º. Que se remita al Sr. Gobernador civil de la provincia para su inserción en el «Boletín oficial», copia de esta acta que además ha de fijarse al público por término de quince días, y se envíe pasado dicho plazo á la misma autoridad expediente que al efecto instruya el Sr. Alcalde, á fin de que, previos los informes oportunos, tenga á bien elevarlo al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión, extendiéndose la presente acta, que firman los que la intervienen y saben hacerlo, de que yo Secretario certifico.—Siguen las firmas.»

Así resulta del original de referencia, y para que conste, expido la presente con el visto bueno del Sr. Alcalde en Bande á 28 de Marzo de 1902.—Gerardo Lopez.—Visto bueno, El Alcalde, Gándara.

Puebla de Trives

La recaudación de consumos del primer trimestre actual se llevará á efecto por el repartimiento del año anterior con rebaja de la décima transitoria, durante los días cinco al diez de Abril próximo en el despacho de costumbre; sin perjuicio de las bonificaciones consiguientes al hacerse la cobranza del segundo trimestre por el nuevo repartimiento.

Puebla de Trives 30 de Marzo de 1902.—El Alcalde, Domingo Núñez.

Rairiz de Veiga

Formado de nuevo el repartimiento del impuesto de consumos del actual año correspondiente á este municipio, queda de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento, por el término de ocho días hábiles, á contar desde el en que

aparezca inserto en el «Boletín oficial» de la provincia, pudiendo los contribuyentes comprendidos en el mismo, examinar sus cuotas durante dicho término y producir las reclamaciones que crean justas en el oportuno juicio de agravios que se celebrará pasado dicho término.

Rairiz de Veiga 30 de Marzo de 1902.—El Alcalde, Patricio Miguez.

JUZGADOS

Don Florencio Alonso Lasiote, Juez de instrucción de la ciudad y partido de Orense.

Por la presente cito, llamo y emplazo á los sujetos de las señas que se expresan á continuación que huyeron hacia las provincias de Lugo, León, Oviedo ú otras colindantes, para que dentro de veinte días á contar desde la inserción de este edicto en la «Gaceta de Madrid» y «Boletín oficial» de esta provincia, comparezcan en este Juzgado, á responder de los cargos que contra los mismos resultan, en el sumario sobre robo de dinero y valores en el comercio de D. Francisco Villanueva de esta plaza.

Y encargo á las autoridades civiles y militares, agentes de la policía judicial y demás dependientes de la autoridad, que procedan á la busca y captura de dichos sujetos, y caso de ser habidos, los pongan á mi disposición en la cárcel de este partido con el dinero ó efectos que en su poder se encuentren.

Dado en Orense á veintisiete de Marzo de mil novecientos dos.—Florencio A. Lasiote.—El Actuario, Pedro Cardero.

Sujetos que se citan

Uno alto, moreno, delgado, bigote y ojos negros, vestía traje negro, sombrero y capa idem y de unos cuarenta y ocho años de edad.

Otro pequeño, color pálido, delgado, ojos castaños claros, traje, gorra y carrik oscuros, bigote rojo y de unos cuarenta y tres años; y.

Otro que dijo llamarse Fausto Penasco, de unos treinta y ocho años, bien parecido, estatura regular, color bueno, ojos negros, barba recortada y negra, sombrero bajo y capa negra.

Don Florencio Alonso Lasiote, Juez de instrucción de Orense.

Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo á Santiago Nóvoa Naval, casado, labrador, de cuarenta y siete años, natural de Orbán en el Ayuntamiento de Villamarín, y vecino de Guerál en el de la Peroja, ambos de este partido, de estatura regular, cara redonda, nariz afilada, pelo, cejas y ojos negros, barba afeitada y vistiendo de artesano traje de tela, á fin de que en el término de diez días, contados desde la inserción de la presente en la «Gaceta de Madrid», comparezca á ser indagado y estar á resultados de la causa criminal, que se le sigue por lesiones á su mujer Dolores Tumbeiro; apercibido que de no pre-

sentarse se le declarará rebelde y parará el perjuicio á que haya lugar.

Al propio tiempo se ruega la detención de dicho sujeto á todas las autoridades y fuerza armada, poniéndolo á disposición de este Juzgado en la cárcel de partido.

Dado en Orense á treinta y uno de Marzo de mil novecientos dos.—Florencio A. Lasiote.—De orden de su señoría, Ricardo García.

Don Luis Suarez Prado, Juez de instrucción de este partido.

Llama y emplaza á Pedro Calvo sin segundo conocido, natural de Alperiz, vecino de la misma, y en la actualidad en ignorado paradero, de las señas y circunstancias que al último se expresarán, para que dentro del término de diez días, contados desde la última inserción de la presente en los «Boletines oficiales» de las provincias de Galicia y «Gaceta de Madrid», comparezca en este Juzgado á prestar indagatoria en sumario que se le instruye por el delito de homicidio; bajo apercibimiento de que, en otro caso, será declarado rebelde y le parará el perjuicio á que hubiese lugar con arreglo á la ley.

A la vez, ruego á todas las autoridades y demás individuos de la policía judicial, procedan á su busca y captura, poniéndolo en la cárcel de esta villa á disposición de este Juzgado.

Lalín 26 de Marzo de 1902.—Luis Suarez.—Ramón Santaló y Villar.

Señas del procesado

De veintitres años de edad, grueso, alto de estatura, color bueno, pelo y ojos negros, cara redonda, barba afeitada, viste chaqueta, chaleco y pantalón de paño negro y calza borceguiles.

Don Luis Suarez Prado, Juez de instrucción de este partido.

Llama y emplaza á Amancio Vázquez Fernández, natural de Alperiz, vecino de la misma, y en la actualidad en ignorado paradero de las señas y circunstancias que al último se expresarán, para que dentro del término de diez días, contados desde la inserción de la presente en los «Boletines oficiales» de las provincias de Galicia y «Gaceta de Madrid», comparezca en este Juzgado á prestar indagatoria en sumario que se le instruye por el delito de homicidio; bajo apercibimiento de que, en otro caso, será declarado rebelde y le parará el perjuicio á que hubiese lugar con arreglo á la ley.

A la vez, ruego á todas las autoridades y demás individuos de la policía judicial, procedan á su busca y captura, poniéndolo en la cárcel de esta villa á disposición de este Juzgado.

Lalín 26 de Marzo de 1902.—Luis Suarez.—Ramón Santaló y Villar.

Señas del procesado

De unos veinte años, grueso, estatura regular, buen color, pelo y ojos negros, cara redonda, barba afeitada, de profesión sastre, viste chaleco, chaqueta y pantalón de paño claro y sombrero.

Don Emilio Cortizo Lois, Juez municipal de Avión.

Hago saber: que se halla vacante la plaza de Secretario suplente de este Juzgado; los aspirantes á ella presentarán dentro del término de quince días, desde la publicación del presente en el «Boletín oficial» de la provincia, en la Secretaría del Juzgado las solicitudes acompañadas de los documentos correspondientes.

Avión veintiseis de Marzo de mil novecientos dos.—Emilio Cortizo.

Edictos militares

Don Buenaventura Hernández Francés, primer Teniente del Regimiento de Infantería de Murcia núm. 37 y Juez instructor del expediente que por deserción se sigue contra el recluta de este Regimiento Gumersido González Otero

Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo al referido Gumersido González Otero, hijo de Antonio y Rosa, natural de la parroquia de Santa Comba, del Ayuntamiento de Maside, de la provincia de Orense, de veintidós años de edad, de oficio labrador, para que en el preciso término de treinta días contados desde la publicación de la presente en los periódicos oficiales, comparezca en este Juzgado sito en el Cuartel de San Fernando de esta plaza á responder á los cargos que puedan resultarle del expresado expediente y dar sus descargos.

A la vez en nomhre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y requiero á todas las autoridades tanto civiles como militares y de policía judicial, para que practiquen activas diligencias en busca del referido recluta, y caso de ser habido dentro de la Región, sea puesto á disposición de este Juzgado, y si fuera de ella, á la autoridad militar más próxima, dándome cuenta.

Y para que tenga la debida publicación insértese en el «Boletín oficial» de la provincia de Orense y en la «Gaceta de Madrid».

Dado en Pontevedra á veintiocho de Marzo de mil novecientos dos.—Buenaventura Hernández.

VENTA

Se venden el piso segundo y otras dependencias de la casa número 17 de la calle de las Tiendas de esta ciudad.

Entenderse con D. Gonzálo Martín, respecto al precio y condiciones.

IMPRENTA DE A. OTERO

En este antiguo y acreditado establecimiento, que cuenta con un moderno y completo surtido en máquinas, tipos y orlas, se confecciona toda clase de trabajos, con perfección y economía.

IMPRENTA DE A. OTERO